

**RESUMEN Y PROSPECTIVA**

- **Estrategia coordinada de seguridad en Chiapas logra la detención de 261 policías, y dos alcaldes por comisión de diversos delitos y presuntos vínculos con crimen organizado** (p. 4). Con un amplio operativo en contra de la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno municipal, se logró la detención de 78 servidores públicos en Villaflores y Villacorzo, incluyendo funcionarios implicados en extorsión, además, se capturó al alcalde de Bella Vista junto con 67 policías municipales en Chiapa de Corzo. Estas acciones, coordinadas por fuerzas federales y estatales, sobre todo la fuerza PAKAL, demuestran la voluntad del gobierno para dismantlar estas redes de corrupción, queda ahora la tarea de lograr que los procesos legales concluyan en sentencias condenatorias en caso de comprobarse culpabilidad, y con ello efectivamente disminuir la actividad criminal y mejorar las condiciones de seguridad en el estado. En el futuro inmediato pueden generarse represalias, pero estas acciones envían un mensaje positivo a la sociedad.
- **Continúan acciones para detener autoridades vinculadas con crimen organizado en Estado de México: se logra captura de exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, pero acribillan a policías en Malinalco** (p. 5). El 23 de enero, la exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, María del Rosario Esquivel Matías, fue detenida por su supuesta vinculación con La Nueva Familia Michoacana, aunque su esposo y alcalde electo, Pedro Luis Hernández de Paz (a) “El Wicho”, continúa prófugo. Por otra parte, el día 28, tres policías de Malinalco fueron asesinados sobre la carretera Malinalco-Chalma. El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, aseveró que se brindará apoyo al municipio y se tomarán las medidas necesarias para garantizar los trabajos de vigilancia. Ambos casos son evidencia preocupante de la actividad criminal que aqueja a la entidad y por la que autoridades realizan operativos como Enjambre y Atarraya, para eliminar la corrupción y vinculación de autoridades (incluidas las policías municipales) con el crimen organizado, sin embargo, hasta ahora no han sido suficientes.
- **La región del Papaloapan entre Veracruz y Oaxaca enfrenta ola de violencia con el asesinato de policías y criminales secuestradores** (p. 8). El pasado martes 29 de enero cuatro policías municipales fueron acribillados cuando iban a bordo de su patrulla en una comunidad del municipio de Tuxtepec en Oaxaca. No se ha podido vincular a ningún grupo criminal con esta masacre, pero apenas el 1 de enero había sido retirado

un destacamento de la Secretaría de la Marina, por indicaciones del presidente municipal. En otro evento dentro de la misma región, el mismo día se registró un enfrentamiento en el municipio veracruzano de Santiago Sochiapan, cuando se ejecutaba una orden de aprehensión contra el presunto secuestrador de la activista oaxaqueña Sandra Domínguez, resultaron muertos tres de los delincuentes y un policía. Más tarde se dio a conocer que pertenecían a una célula de una banda local que operaba en la región. Ambos eventos reflejan la ola de violencia de una zona históricamente dominada por enfrentamientos criminales, que hoy vive asediada y atemorizada por secuestros y ataques a policías.

- **A pesar de capturas y decomisos, la violencia persiste en Sinaloa; crisis de gobernabilidad podría forzar renuncia del gobernador (p. 11).** El pasado martes 28 de enero fue detenido Joel Medina Miyazaki (a) "La Morsa". Se trata de un presunto jefe de distribución de fentanilo, operador de laboratorios clandestinos en el municipio de Elota, Sinaloa y cercano al líder de una de las facciones del Cártel de Sinaloa, Aureliano Guzmán Loera (a) "El Guano". Esta captura se suma a las diez mil detenciones y noventa toneladas de drogas incautadas en los últimos cuatro meses en territorio mexicano, no obstante, la violencia sigue sin ceder en Sinaloa, que en esta semana registró múltiples eventos en la sindicatura de Costa Rica perteneciente al municipio de Culiacán. Además, Con la presión ejercida por Estados Unidos a través de los aranceles, y la necesidad de mostrar resultados en el combate al narcotráfico en la frontera norte, aumentan los costos de mantener a Rocha en la gubernatura, Sin embargo, su remoción podría ser leída como una aceptación de la culpabilidad sobre sus nexos con el crimen organizado, lo cual también podría agravar la crisis política.
- **Incidentes de violencia en Cozumel son indicativos de una contienda entre bandas criminales locales (p. 13).** Si bien la violencia criminal en Cozumel mantiene una tendencia decreciente desde finales de 2022, recientes incidentes de incendios provocados sugieren que un actor criminal desea disputar el control de los mercados ilícitos durante los próximos meses. En este sentido, se considera probable que uno de los grupos criminales que tienen presencia en su territorio puedan estar involucrados: Los Pelones o el CJNG podrían ser los agresores, mientras que Los Compich, una banda criminal local con lazos al Cártel de Caborca, podrían ser sus objetivos. Considerando los potenciales efectos si es que el conflicto se intensifica, se considera que la intervención de autoridades de seguridad deberá ser una prioridad para detener una potencial espiral de violencia.
- **Deficiencias del sistema de justicia mexicano afectarán relación con Estados Unidos en ámbito de seguridad (p. 15).** La liberación de Rosalinda González Valencia, esposa de "El Mencho" y figura clave en la estructura financiera del CJNG, ha generado preocupación sobre la capacidad del sistema de justicia mexicano para procesar a

líderes criminales de alto perfil. Este hecho ocurre en un entorno de crecientes tensiones con Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump ha implementado medidas arancelarias y denunciando presuntos vínculos entre grupos criminales y autoridades mexicanas. Mientras la presidenta Sheinbaum defiende la estrategia de seguridad de su gobierno y aboga por una cooperación basada en el respeto a la soberanía, Washington mantiene una posición inflexible, sin descartar medidas unilaterales. La fragilidad de las instituciones judiciales mexicanas y los casos de corrupción podrían reforzar los argumentos en favor de una intervención más agresiva por parte de Estados Unidos. A menos que esta liberación sea parte de una negociación para lograr la captura en el corto plazo de algunos líderes del CJNG.

- **Cuatro de cada 10 autoridades de seguridad pública que han sido víctimas letales del crimen organizado pertenecían a la policía municipal, y uno de cada cinco policías municipales víctimas son de Guanajuato (p. 17).** Lantia Intelligence presenta un análisis del número de víctimas letales del crimen organizado que se encontraban adscritas a algún tipo de autoridad de seguridad pública. El análisis es a nivel estatal y comprende información para los últimos cinco años (2019 a 2024). En total se registraron 1,863 víctimas, donde el 41.0% pertenecían a la policía municipal y el 20.3% a la policía estatal. El 57.3% de las víctimas que eran parte de la policía municipal se concentró en seis entidades: Guanajuato (19.9%), Michoacán (9.4%), Guerrero (7.9%), Zacatecas (7.9%), Sonora (7.1%), y Estado de México (5.2%). Las entidades que aparecen entre los cinco estados con más incidencias en por lo menos cuatro tipos de autoridades de seguridad son: Guanajuato, Guerrero, Michoacán, y Zacatecas.

Detenciones y abatimientos destacados:

- **CDMX, 24 de enero:** Luis Manuel (a) "El Galletas", miembro de una célula delictiva de la **Nueva Familia Michoacana**, fue detenido en Iztapalapa portando un chaleco balístico, marihuana y un arma. Se le vincula con "El Fresa", líder del grupo criminal, y enfrenta cargos por homicidio, secuestro y extorsión.
- **Sonora, 24 de enero:** en una operación conjunta, autoridades de México y EE.UU. desmantelaron una organización dedicada al **tráfico de fentanilo** entre Sonora y Arizona. Capturaron a dos líderes y confiscaron vehículos, armas y drogas. Se presentaron cargos contra seis miembros en EE.UU., mientras se investiga su conexión con células de Los Salazar.
- **Hidalgo, 24 de enero:** un sujeto de nombre Axel, presunto líder de **La Unión Tepito**, fue detenido en Pachuca, acusado de venta de drogas y extorsión en las colonias Condesa y Polanco de la CDMX.

- **Jalisco, 25 de enero:** en Teocaltiche, fueron detenidos siete presuntos miembros del **CJNG** tras un operativo que aseguró un arsenal, vehículos blindados y equipo táctico.
- **Edomex, 30 de enero:** ocho presuntos miembros de la **Nueva Familia Michoacana** fueron arrestados tras un enfrentamiento en Temascalcingo, que dejó dos heridos y un agresor muerto. Se liberó a una posible víctima de secuestro y se aseguraron tres armas de fuego y dos vehículos.
- **Guanajuato, 31 de enero:** un sujeto de nombre Luis (a) "El Pizzero", fue detenido como presunto jefe de plaza del **Cártel de Santa Rosa de Lima**, junto con seis cómplices. Se aseguraron metanfetaminas, vehículos robados y documentos falsos en varios municipios, como parte de las acciones contra el crimen organizado en la región.

ANÁLISIS



Estrategia coordinada de seguridad en Chiapas logra la detención de 261 policías y dos alcaldes por comisión de diversos delitos y presuntos vínculos con el crimen organizado

OPERATIVOS DE SEGURIDAD

La detención de 78 servidores públicos en Villaflores y Villacorzo, Chiapas —incluyendo a Xóchitl Castañón Burguete (directora de Vialidad), René Madariaga (secretario Municipal) y José Gregorio Cedeño (director Policial con identidad falsa y antecedentes penales)— revela una red de extorsión arraigada en estos municipios. Los acusados fueron vinculados a proceso por cobros coercitivos a empresarios y transportistas. De esta manera, la colaboración entre FRIP (Fuerza de Reacción Inmediata Pakal), FGE, Ejército y Guardia Nacional evidenció infiltración criminal en estructuras municipales, con nexos potenciales a grupos organizados. Ante este desmantelamiento, se anticipan reconfiguraciones violentas de células criminales y retaliaciones, mientras el nuevo gobierno estatal enfrenta el desafío de expandir operativos hacia Comitán y Frontera Comalapa. Además, la incautación de drogas y la participación de un expolicía ministerial sugieren nexos entre cuerpos policiacos y redes de narcomenudeo. Ante este operativo se prevén dos escenarios: i) una posible fragmentación de células residuales, o ii) un vacío de poder que otros grupos intenten ocupar. En todo caso, queda por ver si estas acciones marcan un giro definitivo o solo un nuevo orden temporal en una región donde el miedo y la desconfianza en las instituciones siguen arraigados.

Los operativos de esta semana en Chiapas son inéditos en la lucha contra la infiltración criminal en instituciones públicas: la detención del alcalde de Bella Vista, Rosember López Roblero, acusado de abuso de autoridad y nexos con el crimen organizado, junto con 67

policías municipales en Chiapa de Corzo, incluido su director el jueves 30 de enero, reflejan una estrategia de limpia sin precedentes. La estrategia del gobernador Ramírez Aguilar, en coordinación con fuerzas federales y estatales, prioriza desarticular redes de corrupción sistémica, y no solo mafias locales. Cabe destacar que, en particular, no se está vinculando explícitamente los casos a cárteles específicos, sugiriendo un enfoque en cómplices institucionales antes que en grupos armados. En todo caso, la incautación de sistemas de vigilancia ilegales, empleados para monitorear rivales y autoridades, subraya la sofisticación del entramado criminal.

En sus primeros 55 días, la nueva estrategia coordinada de seguridad ha logrado resultados notables en Chiapas: se han capturado 261 policías, al menos dos alcaldes y funcionarios municipales, y se recuperó el control de vías carreteras; y se localizaron 30 fosas clandestinas que han impulsado investigaciones pendientes. Según datos gubernamentales, desde la implementación de PAKAL, el índice de homicidios se redujo en un 63% (en diciembre de 2024, el número de homicidios en el estado fue de 42 cifra 26% inferior al promedio del año que fue de 55.1 casos, pero es un dato de un solo mes). Operativos en Villaflores, Villa Corzo y Frontera Comalapa han desmantelado redes de extorsión y crimen organizado, con el apoyo de 500 elementos, helicópteros, drones y fuerzas federales y militares. La reunión del 24 de enero entre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, y el gobernador reafirmó la coordinación interinstitucional y el compromiso federal para garantizar la paz y la estabilidad en el estado. Los operativos integrados reflejan una respuesta decisiva ante la criminalidad regional.

En otro eje, la llegada de Trump ha intensificado la crisis migratoria en México, impulsando operativos de deportación que utilizan autobuses para repatriar migrantes indocumentados, principalmente de Centroamérica. En este contexto, la Guardia Nacional ha intervenido para dispersar las caravanas migrantes que intentan llegar al norte. Miles de personas, afectadas por la cancelación del programa CBP One, se encuentran atrapadas en territorio mexicano. Las medidas restrictivas actuales evidencian un endurecimiento en la política migratoria, priorizando la seguridad fronteriza y la repatriación, mientras se cuestiona la ausencia de un marco de derechos humanos claro que garantice el respeto a los derechos fundamentales de quienes transitan por Chiapas.

En Pantelhó, la intervención de la DEFENSA ha permitido mantener la paz regional mediante operativos de reconstrucción y control, estabilizando temporalmente la zona. Sin embargo, las protestas reflejan la creciente desconfianza de la comunidad hacia las autoridades estatales. Sin embargo, a manera de prospectiva, la nueva estrategia de seguridad podría profundizar la militarización lo que plantea riesgos para la consolidación de una paz duradera en la región.



Continúan acciones para detener autoridades vinculadas con crimen organizado en Estado de México: se logra captura de exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, pero acribillan a policías en Malinalco

OPERATIVOS DE SEGURIDAD

El 23 de enero, la exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, María del Rosario Esquivel Matías, fue capturada luego de que huyera durante la toma de protesta de su esposo como alcalde del mismo municipio, Pedro Luis Hernández de Paz (a) “El Wicho”, quien aún se encuentra prófugo. Ambos se encuentran bajo investigación del Operativo Enjambre, estrategia para mitigar los efectos de la corrupción y la vinculación de autoridades con grupos del crimen organizado.

Esquivel Matías es investigada por su supuesta colaboración con La Nueva Familia Michoacana (LNFM), a quien habría proporcionado datos de los archivos del ayuntamiento, como registros catastrales y padrones de programas sociales, incluso información sobre quiénes reciben remesas desde el extranjero, para que el grupo criminal pudiera extorsionar, secuestrar y despojar a los habitantes.

La exalcaldesa se encuentra recluida en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, a pesar de que una jueza ordenara su liberación por un primer proceso por extorsión, ya que, según sus defensores este delito no ameritaba prisión preventiva y su aprehensión había sido una violación a sus derechos fundamentales.

Sin embargo, agentes de la Fiscalía Estatal ejecutaron otra orden de aprehensión por una segunda carpeta de investigación por el delito de extorsión, por lo que tuvo que quedarse en la cárcel. Además, el 27 de enero se le cumplimentó una tercera orden de aprehensión nuevamente por extorsión. Hasta el momento, sólo se sabe que las acusaciones vienen de tres casos particulares, en uno de ellos se hace alusión a LNFM. Según esta última, en febrero de 2024, la exalcaldesa y su esposo amenazaron a un integrante del cabildo con ser asesinado por un sujeto identificado como “El Hércules”, integrante del grupo criminal, si no aceptaba firmar unas actas de sesiones del cabildo que nunca se llevaron a cabo.

Además, la exfuncionaria es investigada por una presunta deuda de 15 millones de pesos que contrajo con líderes de la Familia para poder financiar su campaña electoral en 2021. A cambio, ofreció saldar la deuda con recursos públicos.

Mientras tanto, su esposo “El Wicho” continúa prófugo de la justicia desde el 17 de diciembre cuando integrantes del cabildo y pobladores lo protegieron para que pudiera escapar durante su toma de protesta. “El Wicho” ha acusado a las autoridades de hostigar a su familia para obtener información de su paradero e incluso dijo que su hija menor de edad había sido secuestrada. La menor fue localizada con su madre en una casa en los límites de Metepec, cuando ésta fue aprehendida.

En dicha propiedad, se encontraron más de cinco millones de pesos de los que no se pudo comprobar procedencia lícita. Elementos de la fiscalía también dijeron que la exalcaldesa trató de sobornarlos con dinero, un auto y documentos oficiales del municipio.

Por otra parte, el 28 de enero, tres policías municipales de Malinalco fueron asesinados cuando realizaban labores de vigilancia en la carretera Chalma-Malinalco. De estos hechos, sólo se sabe que los atacantes les dispararon desde una camioneta y después escaparon, sin que hasta el momento se tenga más información.

Ante esto, algunos elementos de seguridad decidieron renunciar ante la falta de condiciones para realizar sus labores. El secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, admitió que existe preocupación entre los agentes, pero garantizó que recibirán respaldo de las fuerzas estatales y federales para continuar con las actividades de vigilancia. Sin embargo, la presidenta municipal de Malinalco, Marlen Nieto Vázquez, dijo que no se había presentado ninguna renuncia por parte de los elementos policíacos, lo que demostraría poca comunicación entre autoridades locales y estatales.

Desde que comenzó el Operativo Enjambre, a finales del 2024, se han desplegado más de mil 500 elementos de seguridad estatal y federal en la entidad, principalmente en lugares como Metepec, Valle de Bravo y otros municipios del sur que han sido identificados como prioritarios para la operación criminal.

Sin embargo, las actividades criminales continúan en otras zonas, como Temascalcingo, ubicado en los límites con Michoacán, en donde se registró un enfrentamiento, o el reciente asesinato del primer regidor de Texcoco, Erick Galicia Ortiz, lo que pone en evidencia que, a pesar de algunos logros, la estrategia de seguridad y sus operativos aún no dan alcance a la problemática de las actividades criminales en el estado. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, en la primera semana hubo más asesinatos en la entidad mexiquense (42 casos) que en Sinaloa (34), lo que advierte de la situación de inseguridad.

Hasta el momento, no existe información concluyente de que el asesinato de los policías en Malinalco derive de los operativos Enjambre y/o Atarraya realizados en el estado, pero evidencia que las actividades de los grupos criminales han rebasado los límites y ya no sólo pone en peligro a los habitantes, sino a los mismos responsables de resguardar la seguridad.

El Estado de México continuará siendo importante para los miembros del crimen organizado, por sus límites geográficos con estados como Michoacán, Guerrero y Guanajuato, sus vías de comunicación, y su obvia cercanía con la capital del país, por lo que, aunque los operativos Enjambre y Atarraya traerán beneficios, no se espera que por sí solos logren terminar con la situación delictiva, donde los grupos criminales han logrado permear a las instituciones del gobierno de todos los niveles.



La región del Papaloapan entre Veracruz y Oaxaca enfrenta ola de violencia con el asesinato de policías y criminales secuestradores

DINAMICA CRIMINAL

El martes 29 de enero, registramos un ataque armado en el que fallecieron cuatro policías municipales de Tuxtepec mientras viajaban en una patrulla. Un quinto elemento resultó herido de gravedad, así como dos civiles que se encuentran hospitalizados. La agresión se registró alrededor de las 07:20 horas cerca de la capilla del ejido Las Limas, a tres kilómetros de la cabecera municipal de San Juan Bautista Tuxtepec y a unos 500 metros del plantel número 7 del Colegio de Bachilleres, institución que anunció la suspensión de clases.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, detalló que las víctimas son el subdirector de la Policía Municipal, Víctor Valentín Morales (alto mando de la corporación durante los gobiernos municipales anteriores), así como los oficiales municipales Emmanuel Q. Lago, Jonathan Salcedo Azamar y Luis Ángel Sixto. Además, el secretario reiteró que, debido a que Tuxtepec se encuentra entre los municipios con mayor incidencia delictiva en el estado, se había planteado instalar una estación de la SEMAR, sin embargo, fue rechazada por el presidente municipal. Ante esta negativa, en su lugar buscarán instalar un centro de operaciones mixtas que será manejada por el estado, para atender la inseguridad en el área.

- Respecto a Víctor Valentín Morales el 3 de noviembre de 2018 fue nombrado director de Seguridad Pública Municipal y se mantuvo al mando de la corporación de seguridad en Tuxtepec por varios años. Durante el recién concluido trienio de Irineo Molina (perteneciente a Morena, que buscó la reelección en 2024 y perdió con el actual presidente municipal), también fue nombrado policía primero, y gozaba de amplio reconocimiento de otras corporaciones policiales como un importante actor en la seguridad pública del municipio.
- En fuentes abiertas se señala que apenas en diciembre el presidente municipal Fernando Huerta Cerecedo del Partido del Trabajo y el Partido Unidad Popular, anunció que la seguridad pública de Tuxtepec quedaría en manos de la policía municipal, ya que el anterior gobierno morenista gastaba 600 mil pesos mensuales para tener a los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) patrullando las calles, además de que se habían recibido denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de los marinos. El cambio de mando de la seguridad pública municipal se concretó el 1 de enero de 2025, luego de que el 31 de diciembre pasado la Marina abandonó la ciudad. En fuentes abiertas se menciona que esta decisión refleja posibles presiones o nexos del alcalde con grupos delincuenciales.

- La Fiscalía General de Oaxaca detalló que se trató de un ataque armado e inició las investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca; y confirmó el número de policías asesinados.
- El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, pidió al alcalde de Tuxtepec, Fernando Huerta Cerecedo, cooperar para que ingrese la Marina a vigilar la seguridad de la ciudad más importante de la Cuenca del Papaloapan, esto tras la balacera registrada en la que cuatro policías municipales fueron asesinados. El gobernador del Estado confió que los hechos “no obedezcan al acomodo o reacomodo de algunos grupos delincuenciales. Es importantísima la seguridad de nuestra población y no podemos dejar en manos de la delincuencia la seguridad, eso es lo que nos importa, nos interesa mucho”.
- Respecto a los atacantes sólo se sabe que viajaban en varios vehículos al momento del ataque. No se puede señalar a ningún grupo delincuencial cómo responsable. Las notas informativas han girado en torno a los antecedentes del comandante de la policía municipal ejecutado, así como, cuestionar las razones que llevaron al presidente municipal a solicitar el retiro del personal de la Marina.

Tuxtepec en la región de la Cuenca del Papaloapan es la segunda ciudad más grande de Oaxaca, tiene amplios antecedentes de formar parte de una región con fuerte presencia criminal desde hace más de quince años cuando tuvo presencia del Cartel del Golfo, y de los Zetas. Junto con los municipios veracruzanos con que colinda de José Azueta y Playa Vicente, conforma una región limítrofe y de conexión entre entidades que ha sido asediada por el crimen. De acuerdo con la Plataforma de Lantia Intelligence en Tuxtepec tienen actualmente presencia el CJNG, las Fuerzas Especiales Grupo Sombra y la Organización del Compa Playa. Junto con los municipios oaxaqueños de San Miguel Soyaltepec y Loma Bonita conforman un escudo en el norte del estado para ingresar a la importante zona azucarera de Tres Valles y Oxtotitlán en Veracruz.

- En noviembre de 2024 se reportó en Tuxtepec la desaparición y asesinato del ganadero local Saúl Rodríguez cuyo cuerpo fue encontrado con señales de tortura y huellas de haber intentado disolverlo en ácido.

En otro evento, el miércoles 29 de enero de 2025 fueron abatidos tres delincuentes y un policía de investigación de la SSPC federal murió en el operativo realizado para detener a al presunto responsable de la desaparición de la abogada y activista Sandra Domínguez. Este operativo se realizó en Santiago Sochiapan, municipio del estado de Veracruz ubicado a 100 kilómetros de Tuxtepec en dirección hacia Playa Vicente, y que forma parte de la cuenca del Papaloapan. Cabe señalar que, la activista mixe estaba dedicada a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas oaxaqueñas, y que cobró notoriedad por haber exhibido hace años unos chats de WhatsApp donde funcionarios del gobierno de Oaxaca,

compartías fotografías íntimas de mujeres indígenas. La abogada Sandra Domínguez desapareció junto con su esposo, cuando se encontraban en la comunidad de María Lombardo, en San Juan Cotzocón, Oaxaca, el pasado 4 de octubre de 2024, y permanecen a la fecha sin ser localizada. Su camioneta fue hallada a la orilla de la carretera, en los límites entre Oaxaca y Veracruz.

- En octubre del año pasado, en un comunicado de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca se señaló que el esposo de la activista Sandra Domínguez, identificado como Alexander Hernández, estaba relacionado con actividades de delincuencia organizada y que este vínculo era investigado como parte de las hipótesis de la desaparición de ambos.

Los tres delincuentes abatidos en este operativo, donde participaron policías federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fueron identificados como originarios del estado de Guerrero y formaban parte de una estructura delictiva que operaba para el cártel que comandaba Saíd Viveros Castro (a) “El Cuate”. Se considera que uno de ellos identificado como “El Temo” era el responsable principal de la desaparición de Sandra Domínguez.

- El criminal conocido como “El Cuate” era un generador de violencia buscado por los gobiernos de Veracruz y Oaxaca por denuncias en su contra por extorsión a empresas, robo de ganado, cobro de piso, y a lo que se suma el control de la venta de drogas en pueblos asentados en los límites de ambos estados. Fue abatido por la Fuerza Civil de Veracruz el pasado 8 de junio de 2024 en inmediaciones del poblado de Benito Juárez, en el municipio de Santiago Sochiapan. “El Cuate”, oriundo de Guerrero, fue reemplazado por otro guerrerense, de nombre Odimir Sánchez Benítez (a) “El Cabo”, quien actualmente era jefe de Artemio García Torres (a) “El Temo”, el delincuente al que las autoridades de Veracruz y Oaxaca llegaron a buscar a Sochiapan para ejecutarle orden de aprehensión.

La región de la Cuenca del Papaloapan donde confluyen Oaxaca y Veracruz ha sido lugar de operaciones de importantes carteles, y de bandas locales que han tenido bajo asedio a la población y productores de estos municipios. Los ataques a policías municipales de Tuxtepec posiblemente están asociados con rencillas hacia integrantes de la policía local, que se consideraban un obstáculo para la operación del crimen organizado. La presencia del CJNG en esta zona, y el retiro de la SEMAR de la vigilancia de Tuxtepec coincide con la ejecución del ataque, el presidente municipal ha quedado desprovisto de sus elementos policiales más capacitados, dejando a la población en una situación de indefensión que puede ser aprovechada por el crimen para llevar a cabo más delitos. El Gobierno del estado ha programado reinstalar una base de operaciones en Tuxtepec, y ha recomendado al presidente volver a contar con la presencia de elementos de SEMAR.



A pesar de capturas y decomisos, la violencia persiste en Sinaloa; crisis de gobernabilidad podría forzar renuncia del gobernador

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

El pasado martes 28 de enero fue detenido Joel Medina Miyazaki (a) "La Morsa" en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México. Se trata de un presunto jefe de distribución de fentanilo, operador de laboratorios clandestinos en el municipio de Elota, Sinaloa y cercano al líder de una de las facciones del Cártel de Sinaloa, actualmente aliada con Los Chapitos, Aureliano Guzmán Loera (a) "El Guano". También se reveló que la exdiputada local de Sinaloa y exregidora de Elota, María Eugenia Medina Miyazaki, su hermana; y su madre, María Eugenia Miyazaki Ramírez y actual directora de Desarrollo Económico de Elota, lo protegieron.

Esta detención se suma a las más de diez mil detenciones y noventa toneladas de drogas incautadas en los últimos cuatro meses en territorio mexicano, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la situación de violencia en Sinaloa continúa sin ceder, lo cual ha exacerbado la desesperación y descontento de habitantes del estado.

Los pasados jueves y domingo (23 y 26 de enero) hubo protestas masivas en Culiacán en las que se exigió la renuncia del gobernador, Rubén Rocha Moya, después de que fueran asesinados dos niños y su padre el 19 de enero. Pero ha habido más muestras de descontento durante la semana, una de ellas en un partido de béisbol de los Tomateros de Culiacán, en el que hubo pancartas y gritos exigiendo paz y la renuncia del gobernador; y otra más el 30 de enero en el Congreso de Sinaloa, en la cual activistas, familiares de desaparecidos (van más de 800 casos en los últimos cuatro meses) y demás víctimas de violencia volvieron a exigir la renuncia del gobernador.

Esta situación de inestabilidad política derivada de la crisis de gobernabilidad en el estado y la poca credibilidad del gobernador ha sido también utilizada en estos cinco meses como un arma de las facciones del Cártel de Sinaloa para atacar a sus rivales, pues ambas han acusado el apoyo de las autoridades a la facción contraria, aunque no haya indicios de ello. No debe descartarse que ellos también vean con buenos ojos la renuncia del gobernador, pues el mismo 30 de enero fueron lanzados panfletos en Culiacán desde un helicóptero en los que se acusaba a Rocha Moya de estar vinculado con Los Chapitos, lo cual ya había sido señalado por Ismael "El Mayo" Zambada en la carta en la que relató su supuesto secuestro y detención.

A pesar de esto, el gobernador se ha rehusado a renunciar y ha sido apoyado por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien rechazó tener atribuciones para removerlo y apoyó al gobernador emanado de su partido. En cambio, insistió en que, en cuanto el

gobierno de Donald Trump "se asiente", continuará exigiendo una explicación oficial de la detención de "El Mayo", lo cual es, probablemente, una posible vía de presión para contrarrestar las exigencias del gobierno estadounidense, ya que es posible que hubiera un trato entre Los Chapitos y autoridades norteamericanas. Por su parte, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró que esperará a que se realice la audiencia de Zambada en Estados Unidos el próximo 22 de abril para decidir si deben indagarse o no los supuestos nexos de Rocha Moya con el crimen organizado, lo cual da cuenta de que, pese a la presión social, todavía no se contempla como un escenario probable la renuncia del gobernador.

Adicional a lo anterior, el pasado jueves 30 de enero ocurrieron múltiples eventos relevantes en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán:

- Fue localizado un cadáver con signos de tortura y un tiro de gracia. El cuerpo tenía también una cartulina con un narco mensaje, el cual no fue dado a conocer por las autoridades, que, sin embargo, sí pudieron identificar el cuerpo (Jaime Enrique, de 23 años y habitante de la Colonia Guadalupe Victoria).
- Fue detenido un joven identificado como Ricardo y presuntamente vinculado con Los Chapitos, pues en su celular se encontraron vídeos de tortura y asesinatos contra miembros de la facción rival del Cártel de Sinaloa, "La Mayiza" y de otras organizaciones.
- Más tarde se llevó a cabo una persecución y enfrentamiento entre militares y civiles armados. En este evento, ocurrido en la carretera Culiacán-El Dorado, hubo intercambios de disparos entre militares y civiles que intentaban huir a bordo de varios vehículos, lo cual provocó la volcadura de dos de ellos y la muerte de siete personas, entre las cuales había dos militares y cinco civiles. Hubo un detenido.
- Otro hecho fue en el Campo Agrícola Paralelo 38, en el cual sicarios de organizaciones rivales (probablemente facciones del Cártel de Sinaloa) se enfrentaron y dejaron un saldo de tres heridos (un hombre, un niño y una mujer). Los agresores fueron detenidos por la Policía Estatal Preventiva después de una persecución.
- El 31 de enero, a partir de la intensificación de la vigilancia por los hechos mencionados anteriormente, fueron identificados y detenidos dos hombres que habían secuestrado a dos personas, las cuales fueron rescatadas.

Por ahora, aunque en diciembre hubo una leve disminución de Víctimas Letales del Crimen Organizado, revirtiendo la tendencia creciente, la crisis de violencia no da señales de ceder y parece que continuará a pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora. Una prueba de ello es la percepción de inseguridad de los habitantes de Culiacán, que, de acuerdo con la

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pasó de 55.7% a 90.6% en solo tres meses (septiembre a diciembre del 2024). Además, la crisis de gobernabilidad amenaza con agravarse derivada de la crisis política que enfrenta el gobierno del estado que, si bien permanece con el firme apoyo del gobierno federal, continuará debilitándose en la medida en la que la violencia permanece. Considerando lo anterior, aunque aún no se baraje la posibilidad de la renuncia del gobernador o la desaparición de poderes en el estado, es posible que, con la presión de Estados Unidos, de los habitantes de Sinaloa y también de las organizaciones criminales, eventualmente sea necesario recurrir a alguna de estas opciones para apuntalar la estrategia de seguridad y evitar que la impopularidad del gobernador genere mayores consecuencias. Por otro lado, la explicación principal de que hasta ahora no haya sucedido es que la remoción del gobernador podría ser leída como una aceptación de la culpabilidad de los nexos de este con el crimen organizado, lo cual también podría agravar la crisis política.



Incidentes de violencia en Cozumel son indicativos de una contienda entre bandas criminales locales

DINÁMICA CRIMINAL

Aunque la violencia criminal en Cozumel mantiene una tendencia decreciente desde finales de 2022, incidentes de actividad criminal en el municipio sugieren que hay un renovado interés por parte de alguno de los grupos criminales que tienen presencia en él para eliminar a sus rivales y hacerse del control de los redituables mercados ilícitos relacionados con el sector turismo.

- En este sentido, el 29 de enero, aparentes miembros de un grupo criminal local lanzaron bombas molotov a vehículos que se encontraban estacionados en cabecera municipal de Cozumel, Quintana Roo. Los ataques ocurrieron en un lapso de 30 minutos, lo que sugiere que éstos fueron efectuados por un mismo grupo criminal y aunque los vehículos se encontraban en tres colonias distintas de la cabecera municipal —10 de abril, San Gervasio y Taxistas—, forman parte de una estrategia de intimidación en contra de sus rivales.

Si bien Cozumel es un municipio pequeño que sólo abarca la isla del Caribe y una pequeña zona continental, en él se encuentran múltiples bandas criminales que compiten por el control de los mercados de droga y extorsión. Conviene mencionar que, a pesar de su proximidad con la zona continental de Quintana Roo, en este municipio se encuentran organizaciones criminales distintas.

- Aunque en el pasado reciente se ha especulado de la presencia del Cártel de Sinaloa en el municipio, éste no parece tener presencia al menos directa, si bien es posible que colabore de forma indirecta con las bandas criminales locales. En este sentido, a lo largo de 2024 se identificaron indicios de que las personas que se ostentan como el Cártel de Sinaloa serían miembros de otras bandas menores independientes o vinculadas al Cártel de Caborca.
- Por su parte, el CJNG sí ha hecho públicos intentos de hacerse del control del municipio, pero ha fracasado en la medida en que éste busca mercados más redituables en otros puntos del estado con alta afluencia de turistas (por ejemplo, a mediados de 2024 se dieron a conocer múltiples anuncios de su ingreso al municipio sin que éstos tuvieran consecuencias relevantes).

Probablemente una de las organizaciones criminales más importantes de la zona es el Cártel de Caborca, el que incursionó en los mercados ilícitos del municipio aproximadamente en marzo de 2023. No obstante, parece haber abandonado la lucha para movilizarse hacia Cancún u otras ciudades turísticas al norte.

- La organización criminal estableció una alianza con La Barredora, una banda criminal con presencia en Tulum (diferente al brazo armado La Barredora 24/7 del Cártel de Caborca) para lanzar una intensa lucha por el estado en la primera mitad de 2023.
- Uno de los grupos más importantes en el municipio es Los Compich, un brazo armado con presencia históricamente vinculado a La Barredora.

Una segunda organización relevante es Los Pelones, una mafia criminal con sede en Playa del Carmen, pero cuyas actividades se extienden hasta Tulum, Cozumel y Felipe Carrillo

Puerto. Si bien ésta es una organización criminal pequeña, es sumamente poderosa por los importantes ingresos que obtiene de la venta de drogas a turistas y extorsión a negocios de los municipios.

A partir de la información disponible, es probable que Los Pelones o una banda criminal afín al CJNG —que en Quintana Roo utiliza el nombre “La Mera Verga”— sea la responsable de los ataques esta semana y que los vehículos pertenezcan a Los Compich. Sin embargo, destaca que ésta se considera sólo una primera agresión de lo que será una contienda que podría prolongarse los próximos meses. Por lo tanto, se considera indispensable que autoridades realicen operativos con los que se detenta a los responsables para evita que el municipio continúe una espiral de deterioro.

Deficiencias del sistema de justicia mexicano afectarán relación con Estados Unidos en ámbito de seguridad

RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – ESTADOS UNIDOS

El pasado 30 de enero, Rosalinda González Valencia (a) “La Jefa”, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes (a) “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recibió una orden de liberación inmediata por parte de la jueza federal de control con sede en Cuernavaca, Morelos. La jueza Perla Fabiola Ayala Estrada indicó que González Valencia había cumplido más de la mitad de su condena, lo que, sumado a su buena conducta, la hacía beneficiaria de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. En consecuencia, en los siguientes días González Valencia abandonó el penal femenino de Morelos, al cual ingresó en diciembre de 2023 para cumplir una sentencia que habría sido de cinco años por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

- “La Jefa” había sido detenida y vinculada en 2018, año en el que, tras pagar una fianza de un millón y medio de pesos, se le otorgó libertad condicional. Sin embargo, al fallar en presentarse en el reclusorio para firmar el libro de procesados, el juez ordenó la modificación de su sentencia y ordenó la reaprehensión. González Valencia fue detenida por segunda vez en 2021, por elementos del Ejército y de la Fiscalía General de la República en Zapopan, Jalisco.

Rosalinda González Valencia no sólo es la esposa del líder del Cártel Jalisco, sino que además ha sido acusada de ser la responsable de la administración de los recursos económicos y legales del cártel. Su hermano, Abigael González Valencia, es el presunto líder de Los Cuinis, segundo al mando después de “El Mencho”, y fue el encargado del brazo financiero de CJNG hasta su captura en 2015. Desde entonces una serie de operativos se han concentrado en neutralizar a los hermanos González Valencia: Elvis, Édgar, Mauricio, Arnulfo, Ulises, Gerardo, José, Luis Ángel, Ivette, María Elena, Érika, Berenice, Noemí, Marisa y Abigaíl.

Pese a que Rosalinda González Valencia contaba con los requisitos legales para solicitar su liberación prematura, no deja de sorprender que el sistema penitencial haya accedido a la liberación de una persona con tal relevancia dentro del CJNG. Particularmente, esta decisión es polémica teniendo en cuenta las recientes presiones internacionales contra organizaciones criminales mexicanas como CJNG. Luego de asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 20 de enero para designar a los cárteles como organizaciones terroristas, entre las cuales es altamente probable que se encuentre el CJNG, pues sus mandos han sido identificados desde hace años por instituciones como la DEA y el Departamento del Tesoro como objetivos prioritarios para la seguridad nacional norteamericana.

El pasado 01 de febrero, el gobierno federal americano anunció una serie de medidas arancelarias contra los gobiernos de Canadá, China y México como represalia por la presunta responsabilidad en la crisis de fentanilo y de migración, dos temas que el presidente republicano convirtió en ejes centrales de su campaña en 2024. Entre los elementos que más causaron polémica en México fue la acusación de la Casa Blanca a propósito de las alianzas del gobierno mexicano con los cárteles del narcotráfico. La presidenta Sheinbaum publicó unas horas después en X (antes Twitter) una respuesta condenatoria sobre la decisión de los aranceles, y comenzó por negar categóricamente la afirmación estadounidense respecto a la confabulación del gobierno mexicano con los grupos criminales.

- Según la presidenta de México: el “gobierno ha asegurado en cuatro meses más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de diez mil personas vinculadas con estos grupos”. Además, indicó que, si el gobierno americano quisiera combatir la venta del opioide en su territorio, combatiría la venta del estupefaciente en las calles, el lavado de dinero, así como la venta de armas que se transfieren a México y que terminan en manos de los cárteles.

La posición oficial del gobierno de México aboga por la coordinación entre iguales para combatir a los grupos narcotraficantes, bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y soberanía. Sin embargo, este argumento ha encontrado una respuesta poco receptiva por parte del gobierno de Donald Trump, quien no se ha pronunciado sobre qué medidas concretas en términos de seguridad pública debería cumplir el gobierno de México o el de Canadá para levantar el castigo arancelario. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dialogó el pasado 31 de enero con el secretario de Defensa General Ricardo Trevilla Trejo y con el secretario de Marina, Almirante Raymundo Morales Ángeles, en el que se confirmó el interés de Hegseth por proteger la seguridad de la frontera sur en el ámbito de narcóticos y migrantes.

Aunque los aparatos de seguridad policiales y militares de México estén comprometidos con la cooperación bilateral en términos de comunicación y coordinación, es difícil asegurar que estos elementos serán suficientes para apaciguar las demandas del presidente Trump. A pesar de la buena voluntad de las instituciones de seguridad federales, la posibilidad de impulsar acciones más agresivas y violatorias de la soberanía territorial mexicana no pueden descartarse, como ha indicado el secretario Hegseth, “todas las opciones están sobre la mesa” al momento de contemplar la erradicación de los cárteles de droga. Más aún, la debilidad de las instituciones de procuración de justicia mexicanas, como las fiscalías o los jueces que liberan a criminales de alto perfil como Rosalinda González Valencia, no contribuye a restablecer la debilitada confianza del gobierno norteamericano en las autoridades mexicanas. Es un hecho, pese a la contundente negativa de la presidenta Sheinbaum, que las redes de corrupción y colaboración entre las autoridades mexicanas y el crimen organizado son un factor fundamental para la proliferación de los mercados ilícitos. Aun si el gobierno federal mexicano está libre de dichos vínculos, la corrupción de las autoridades locales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, son un factor de riesgo en favor de la implementación de medidas más agresivas por parte de los Estados Unidos durante las siguientes semanas.



Cuatro de cada 10 autoridades de seguridad pública que han sido víctimas letales del crimen organizado pertenecían a la policía municipal, y uno de cada cinco policías municipales víctimas son de Guanajuato

ANÁLISIS LANTIA INTELLIGENCE
















Lantia Intelligence presenta un análisis del número de víctimas letales del crimen organizado que se encontraban adscritas a algún tipo de autoridad de seguridad pública. Las víctimas se encuentran clasificadas en ocho subgrupos: altos mandos policiales, federal (Guardia Nacional), militar (SEDENA y SEMAR), policía estatal, policía municipal, policía ministerial (incluye personal de Fiscalías, Procuradurías, o policía judicial), otro tipo de policía (tales como policías comunitarias), y policías sin adscripción especificada. El análisis es a nivel estatal y comprende información para los últimos cinco años (2019 a 2024). Los principales hallazgos indican lo siguiente:

- En total se registraron 1,863 víctimas, donde el 41.0% pertenecían a la policía municipal, el 20.3% a la policía estatal, el 9.6% eran altos mandos policiales, el 7.4% eran militares, el 6.2% de la policía ministerial o judicial, y el 5.5% de la Guardia Nacional.
- De 2023 a 2024 se registró una disminución del 6.6% del total de víctimas que formaron parte de autoridades de seguridad pública. Las víctimas de la policía municipal

registraron una disminución del 5.0%, mientras que las víctimas de la policía estatal aumentaron en 6.6%.










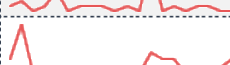




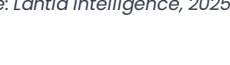
- El 57.3% de las víctimas que eran parte de la policía municipal se concentró en seis entidades: Guanajuato (19.9%), Michoacán (9.4%), Guerrero (7.9%), Zacatecas (7.9%), Sonora (7.1%), y Estado de México (5.2%).
- El 50.8% de las víctimas que fueron parte de la policía estatal se concentró en seis entidades: Zacatecas (12.2%), Estado de México (9.8%), Guanajuato (8.5%), Guerrero (7.7%), Chihuahua (6.6%), y Colima (6.1%).
- La mitad de los altos mandos policiales que han sido víctimas letales del crimen organizado se concentró en cinco entidades: Michoacán (11.6%), Sonora (11.6%), Guerrero (10.9%), Tamaulipas (8.7%), y Sinaloa (7.2%).
- Las entidades que aparecen entre los cinco estados con más incidencias en por lo menos cuatro tipos de autoridades de seguridad víctimas del crimen organizado son: Guanajuato, Guerrero, Michoacán, y Zacatecas.

Autoridades de Seguridad Pública Víctimas Letales del Crimen Organizado (2019 a 2024)

Estado	Total	%	Tendencia Trimestral 2019 a 2024	Estado	Total	%	Tendencia Trimestral 2019 a 2024
Alto Mando Policial				Federal			
Guerrero	24	13.5%		Jalisco	11	10.7%	
Zacatecas	19	10.7%		Baja California	9	8.7%	
Guanajuato	13	7.3%		Michoacán	9	8.7%	
Baja California	12	6.7%		Guanajuato	8	7.8%	
Michoacán	12	6.7%		Sinaloa	7	6.8%	
Sonora	12	6.7%		Resto de entidades	59	57.3%	
Resto de entidades	86	48.3%		Total	103	100.0%	
Total	178	100.0%					



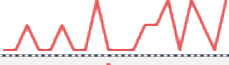



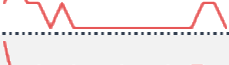








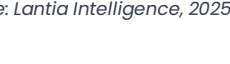
Fuente: Lantia Intelligence, 2025.

Autoridades de Seguridad Pública Víctimas Letales del Crimen Organizado (2019 a 2024)

Estado	Total	%	Tendencia Trimestral 2019 a 2024	Estado	Total	%	Tendencia Trimestral 2019 a 2024
Militar				Policía Estatal			
Michoacán	16	11.6%		Zacatecas	46	12.2%	
Sonora	16	11.6%		México	37	9.8%	
Guerrero	15	10.9%		Guanajuato	32	8.5%	
Tamaulipas	12	8.7%		Guerrero	29	7.7%	
Sinaloa	10	7.2%		Chihuahua	25	6.6%	
Resto de entidades	69	50.0%		Colima	23	6.1%	
Total	138	100.0%		Resto de entidades	186	49.2%	
				Total	378	100.0%	




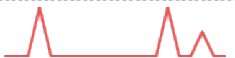










Fuente: Lantia Intelligence, 2025.

Autoridades de Seguridad Pública Víctimas Letales del Crimen Organizado (2019 a 2024)

Estado	Total	%	Tendencia Trimestral 2019 a 2024	Estado	Total	%	Tendencia Trimestral 2019 a 2024
Policía Ministerial, Fiscalías, Procuradurías, Judicial				Policía Municipal			
México	16	13.9%		Guanajuato	152	19.9%	
Guerrero	13	11.3%		Michoacán	72	9.4%	
Chihuahua	11	9.6%		Guerrero	60	7.9%	
Guanajuato	8	7.0%		Zacatecas	60	7.9%	
Jalisco	8	7.0%		Sonora	54	7.1%	
Puebla	8	7.0%		México	40	5.2%	
Resto de entidades	51	44.3%		Resto de entidades	326	42.7%	
Total	115	100.0%		Total	764	100.0%	

Fuente: Lantia Intelligence, 2025.

Autoridades de Seguridad Pública Víctimas Letales del Crimen Organizado (2019 a 2024)

Estado	Total	%	Tendencia Trimestral 2019 a 2024	Estado	Total	%	Tendencia Trimestral 2019 a 2024
Policía no especificado				Policía Otro			
Guanajuato	34	21.4%		Michoacán	14	50.0%	
Guerrero	20	12.6%		Veracruz	5	17.9%	
Morelos	14	8.8%		Guerrero	3	10.7%	
CDMX	9	5.7%		Resto de entidades	6	21.4%	
Michoacán	8	5.0%		Total	28	100.0%	
Veracruz	8	5.0%					
Zacatecas	8	5.0%					
Resto de entidades	58	36.5%					
Total	159	100.0%					

Fuente: Lantia Intelligence, 2025.